

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Justicia y sus Organismos Públicos, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la creación de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Justicia y sus Organismos Públicos, en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.

Examinado el contenido del Proyecto, no procede realizar observaciones específicas respecto de su articulado. No obstante, es preciso efectuar dos puntualizaciones:

1. Desde el punto de vista de la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos, para la conservación y destrucción de la documentación deberá tenerse especialmente en consideración, además de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, lo establecido por el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor:

*“Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.*

*No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.*

*Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos.”*

En este sentido, la Sección segundo del Capítulo VII del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, regula el procedimiento para la

autorización de conservación de datos para fines históricos, estadísticos o científicos.

2. Desde el punto de vista formal, el Proyecto será aplicable, conforme dispone su artículo 6, a los documentos y series documentales producidos, conservados o reunidos por los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia y los Organismos Públicos vinculados o dependientes del mismo, debiendo recordarse el estatus de especial independencia del que el ordenamiento jurídico ha dotado a esta Agencia Española de Protección de Datos.

Así, el artículo 35.1 de la Ley Orgánica 15/1999 señala en su inciso primero que “la Agencia de Protección de Datos es un Ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones”, añadiendo el artículo 1.2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 428/1993, que “la Agencia de Protección de Datos actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia”.

En consecuencia, no cabría considerar a esta Agencia integrada en el ámbito de aplicación del Proyecto, al no encontrarse encuadrada en su artículo 6.2.